

MEMORIA SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN, CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y DE SOLVENCIA APLICADOS Y CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN EN EL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE “ATENCIÓN RESIDENCIAL Y DE CENTRO DE DÍA A PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL, GRAVEMENTE AFECTADAS” EN EL CENTRO VILLA SANTA TERESA DE GOTARRENDURA (ÁVILA)

De conformidad con lo dispuesto en los apartados a) y c) del artículo 116.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en el expediente de contratación “...se justificará adecuadamente la elección del procedimiento de licitación, así como los criterios de solvencia técnica o profesional, y económica y financiera, y los criterios que se tendrán en consideración para adjudicar el contrato, así como las condiciones especiales de ejecución del mismo”.

Procedimiento de licitación

El procedimiento que se propone utilizar en la tramitación del expediente de contratación del servicio de “Atención residencial y de centro de día a personas adultas con discapacidad intelectual, gravemente afectadas”, en el Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), es el procedimiento de licitación con negociación; supuesto previsto en el **artículo 167 f)** de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP):

“Los órganos de contratación podrán adjudicar contratos utilizando el procedimiento de licitación con negociación en los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios cuando se dé alguna de las siguientes situaciones: (...)

f) Cuando se trate de contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio”.

La residencia y centro de día Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila) constituye un recurso social considerado fundamental para la atención de aquellas personas con discapacidad intelectual que, por circunstancias personales o familiares, no pueden permanecer en su domicilio.

El 24 de octubre de 1990, la entonces Consejería de Integración Social de la Comunidad de Madrid, actual Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y las Religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa – Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), suscribieron un convenio para la atención a personas con discapacidad intelectual, con una duración anual, prorrogable sucesivamente por el mismo período de tiempo. El convenio, conforme a lo establecido en la cláusula vigésima, se vino prorrogando anualmente, siendo la última prórroga aprobada la correspondiente al año 2015.

La tramitación de la prórroga para el año 2016 no pudo someterse a autorización del Consejo de Gobierno, como consecuencia del informe de 21 de diciembre de 2015 de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid. Por ello, en virtud del citado informe, y con el fin de disponer de un instrumento jurídico que permitiera seguir dando cobertura a dicho servicio, el 9 de diciembre de 2016 se formalizó el contrato entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, y la entidad Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), para

el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2020 (cuatro años, sin posibilidad de prórroga). Dado que el actual contrato finalizó el pasado 31 de diciembre de 2020, es necesario tramitar un nuevo contrato que dé cobertura a la asistencia de una usuaria con plaza pública reconocida de la Comunidad de Madrid.

Justificación del procedimiento seleccionado: El procedimiento de contratación elegido para seguir dando cobertura al servicio de atención residencial y de centro de día que viene prestándose por el Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), desde el año 1990, es el **procedimiento de licitación con negociación** de acuerdo con la posibilidad prevista en el citado artículo 167 apartado f) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y ello en atención a las circunstancias concurrentes en la usuaria con plaza pública de la Comunidad de Madrid que son:

- El perfil de la usuaria: se trata de una persona con discapacidad intelectual, gravemente afectada, que llevan siendo atendidos en ese centro desde hace muchos años. El centro es su hogar y su entorno ordinario de vida. Esta usuaria permanece en el centro desde hace 50 años.
- La edad de la usuaria: tiene 64 años, por lo que su traslado a otro centro supondría un grave trastorno al sacarlos de su hogar de las últimas décadas. La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de servicios sociales de la Comunidad de Madrid establece expresamente en su artículo 4 h) entre los derechos de las personas que acceden a los servicios sociales, *“el derecho a la continuidad en la prestación de la ayuda o servicio en los términos establecidos o convenidos, siempre que se mantengan las condiciones que originaron su concesión”*.

Con el fin de garantizar la continuidad en la atención prestada a la usuaria del centro y preservar su bienestar y, teniendo en cuenta el grave perjuicio que podría causar un hipotético traslado a esta persona en situación de especial vulnerabilidad, no es posible contratar estos servicios con otro centro que no sea el que viene atendiendo a esta usuaria desde hace años, el Centro Villa Santa Teresa de Gotarrendura (Ávila), siendo aplicable el supuesto previsto en el apartado f) del artículo 167 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Criterios de adjudicación

Se ha considerado procedente la utilización de una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, conforme a la previsión contemplada en el artículo 145 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La mejor relación calidad-precio se evaluará con arreglo a los siguientes criterios económicos y cualitativos:

1.- Criterios económicos: hasta 49 puntos.

Se valorará en este apartado hasta un máximo de 49 puntos el precio ofertado por el licitador. La puntuación se asignará en función de la oferta más económica de las admitidas a licitación, según la siguiente fórmula:

$$\text{Puntuación} = \frac{49 \times \text{Baja de licitación de la oferta que se valora}}{\text{Baja de licitación de la oferta más baja}}$$

*Bajas de licitación IVA excluido

2.- Criterios cualitativos: hasta 51 puntos

2.1: Realización de actividades de ocio y tiempo libre dentro del centro: 30 puntos

La organización y ejecución, a cargo del adjudicatario, de actividades de ocio y tiempo libre a realizar dentro del centro se valorará con 5 puntos por cada actividad anual, hasta un máximo de 30 puntos.

2.2: Realización de actividades de ocio y tiempo libre fuera del centro: 21 puntos

La organización y ejecución, a cargo del adjudicatario, de actividades de ocio y tiempo libre a realizar fuera del centro se valorará con 7 puntos por cada actividad anual, hasta un máximo de 21 puntos.

Criterios de solvencia

La determinación de los criterios de solvencia en este contrato de servicios se ajusta a lo previsto en los artículos 87 y 90 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

a) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA ECONÓMICA Y FINANCIERA.

Se realizará por los medios previstos en el artículo 87.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: *“Volumen anual de negocios, o bien volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente”*.

Criterio de selección: El licitador deberá acreditar un volumen anual de negocio en el mejor de los tres últimos ejercicios naturales (2018, 2019 y 2020) por importe igual o superior a un año de licitación sin IVA del contrato, es decir: 27.367,70 euros.

Forma de acreditación: Los licitadores deberán presentar una declaración firmada por el representante legal de la empresa con la cifra del volumen anual de negocios de cada uno de los tres ejercicios.

b) ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA TÉCNICA Y PROFESIONAL.

Se realizará, conforme al artículo 90.1 a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público: *“Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos”*.

Criterio de selección: El licitador deberá acreditar durante el año de mayor ejecución de los últimos tres años, un importe ejecutado equivalente a nueve meses de licitación del contrato, es decir, 20.525,78 euros, en servicios de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato.

Se entiende por servicios de igual o similar naturaleza la gestión de una residencia con atención diurna a personas adultas con discapacidad intelectual.

Forma de acreditación: Los servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector público; cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un

certificado expedido por este o, a falta de este certificado, mediante una declaración del empresario acompañado de los documentos obrantes en poder del mismo que acrediten la realización de la prestación; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente. En los certificados o declaraciones deberá concretarse, obligatoriamente, el centro objeto de la prestación, tipología de plazas y los importes anuales ejecutados.

Condiciones especiales de ejecución

A su vez, el artículo 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público dispone la obligatoriedad del establecimiento en el pliego de cláusulas administrativas particulares de, al menos, una de las condiciones especiales de ejecución enumeradas en el apartado 2 del mismo artículo. Teniendo en cuenta la naturaleza del contrato de servicios a licitar, en el expediente se ha optado por establecer una condición especial de ejecución de tipo social, claramente vinculada con el objeto del contrato. En concreto, se establece que “la empresa adjudicataria, en las nuevas contrataciones de personal adscrito a la ejecución del contrato que se produzcan durante la ejecución del mismo, debe comprometerse a que al menos el 50% sean indefinidas”, (no se computarán a estos efectos aquellos contratos que deriven de situaciones de incapacidad temporal, sustituciones de vacaciones o situaciones análogas. Si a lo largo de la ejecución del contrato se produce una sola contratación, ésta deberá ser de carácter indefinido). De esta manera, además de cumplir con la obligatoriedad de establecer en el PCAP al menos una de las condiciones de ejecución de las enumeradas en el artículo 202.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, concretamente, combatir el paro, se consigue dotar a la plantilla de personal que preste la atención a la persona usuaria del recurso objeto de este contrato de servicios, de una estabilidad laboral que redundará en una mejora en la calidad del servicio prestado, dada la importancia de contar con profesionales de referencia en la atención a personas con discapacidad intelectual, según se ha comprobado a través de una dilatada experiencia en la prestación de este tipo de servicios.

Madrid, (a fecha de firma)

EL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ÓSCAR ÁLVAREZ LÓPEZ